



Libertad y Orden

**AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT**  
**RESOLUCIÓN No. 20223100223276 DEL 2022-08-23**

*“Por la cual se cierra la fase administrativa para los asuntos de formalización privada y administración de derechos y se declara la formalización privada rural, en el marco del Procedimiento Único regulado por el Decreto Ley 902 del 2017 ”*

**EL SUBDIRECTOR DE SEGURIDAD JURÍDICA**

En ejercicio de las facultades legales otorgadas por el Decreto Ley 2363 del 7 de diciembre 2015, el Decreto Ley 902 del 29 de mayo de 2017, el artículo 111 de la Resolución 740 de 13 de junio 2017 y la Resolución 20211000017646 de 15 de febrero de 2021.

**I. CONSIDERANDO**

**1. COMPETENCIA Y FUNDAMENTO JURÍDICO PARA LA FORMALIZACIÓN DE LA PROPIEDAD PRIVADA Y SEGURIDAD JURÍDICA**

Que el artículo 3 del Decreto Ley 2363 del 2015, estableció que: *"La Agencia Nacional de Tierras, como máxima autoridad de las tierras de la Nación, tendrá por objeto ejecutar la política de ordenamiento social de la propiedad rural formulada por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, para lo cual deberá gestionar el acceso a la tierra como factor productivo, lograr la seguridad jurídica sobre esta, promover su uso en cumplimiento de la función social de la propiedad y administrar y disponer de los predios rurales de propiedad de la Nación".*

Que el numeral 22 del artículo 4 del Decreto Ley 2363 de 2015, dispuso que es función de la Agencia Nacional de Tierras: *"Gestionar y financiar de forma progresiva la formalización de tierras de naturaleza privada a los trabajadores agrarios y pobladores rurales de escasos recursos en los términos señalados en el artículo 103 de la Ley 1753 de 2015".*

Que el Artículo 35 del Decreto Ley 2363 de 2015 determinó que: *"La Agencia Nacional de Tierras asumirá, a partir del primero (1o) de enero de 2016, la ejecución del Programa de Formalización de la Propiedad Rural (Resolución 0452 de 2012, modificada por la 181 de 2013), actualmente a cargo del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, para lo cual se adelantarán las operaciones presupuestales y contractuales necesarias (...)"*

Que el Decreto Ley 902 de 2017, en su artículo 36 le otorgó la facultad a la Agencia Nacional de Tierras de declarar mediante acto administrativo motivado, previo cumplimiento de los requisitos legales, la titulación de la posesión y saneamiento de la falsa tradición en favor de quienes ejerzan posesión sobre inmuebles rurales de naturaleza privada, siempre y cuando en el marco del Procedimiento Único de Ordenamiento Social de la Propiedad no se presente oposición de quien alegue tener un derecho real sobre el predio correspondiente, o quien demuestre sumariamente tener derecho de otra naturaleza sobre el predio reclamado.

Que el artículo 111 de la Resolución 740 de 2017, asignó la función de emitir los actos administrativos de titulación de la posesión y saneamiento de la falsa tradición, conforme lo dispuesto en los artículos 36 y 37 del Decreto Ley 902 de 2017, a la Subdirección de Seguridad Jurídica de la Dirección de Gestión Jurídica de Tierras.

Que atendiendo a la función de Gestor Catastral prevista en el artículo 80 de la Ley de la Ley 1955 de 2019, la Agencia Nacional de Tierras, de acuerdo con los estándares y las especificaciones técnicas determinadas por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi -IGAC-,

*“Por la cual se cierra la fase administrativa para los asuntos de formalización privada y administración de derechos y se declara la formalización privada rural, en el marco del Procedimiento Único regulado por el Decreto Ley 902 del 2017”*

levantará los componentes físico y jurídico del catastro, necesarios para los procesos de ordenamiento social de la propiedad.

Que en consecuencia, se valora que la Agencia Nacional de Tierras – ANT, dentro del marco del art. 80 de la Ley 1955 de 2019, esto es, el Plan de Desarrollo para los años 2018 -2022, el Decreto 148 de 2020, ostenta la competencia de Gestor Catastral, la cual la faculta para recaudar insumos técnicos y jurídicos, necesarios para decantar temas de área y, de esta forma proceder a absolver sustancialmente las rectificaciones a que haya lugar.

## **2. INGRESO AL REGISTRO DE SUJETOS DE ORDENAMIENTO – RESO PARA EFECTOS DE FORMALIZACIÓN**

El artículo 11 del Decreto Ley 902 del 2017 creó el Registro de Sujetos de Ordenamiento (RESO), *“como una herramienta administrada por la Subdirección de Sistemas de Información de Tierras de la Agencia Nacional de Tierras, que consigna públicamente a todos los sujetos del presente Decreto Ley. El RESO constituirá un instrumento de planeación y de ejecución gradual de la política pública, bajo el principio de reserva de lo posible, a fin de que el acceso y la formalización de tierras se adelanten de manera progresiva”*.

Que el artículo 47, numeral 4 de la Resolución 740 de 2017, sobre el procedimiento RESO en trámites misionales y los resultados del cruce de la base de datos a fin de verificar las condiciones de elegibilidad del solicitante, dispuso que la *“Subdirección de Sistemas de Información de Tierras consultará la base de datos del SIT y aquellas a las que tenga acceso. Los resultados los consignará dentro del memorando interno dirigido a la Dirección o Subdirección que corresponda según tipo de solicitud*. Conforme lo anterior, el numeral 5 *ibidem* señaló que las dependencias misionales decidirán mediante acto administrativo la inclusión al RESO.

En consecuencia, mediante acto administrativo de inicio de procedimiento único No. 20223100050969 del seis (06) de julio de 2022, la Subdirección de Seguridad Jurídica ordenó la inclusión de la solicitante en el Registro de Sujetos de Ordenamiento (RESO) en la categoría de formalización de la propiedad a título GRATUITO.

### **2.1 DOCUMENTO HISTÓRICO DE LA FORMACIÓN DE PROPIEDAD PRIVADA RURAL.**

#### **2.1.1 Marco Normativo Colonial**

En la Independencia fueron variadas las medidas adoptadas por el nuevo Gobierno dirigidas a modificar las estructuras coloniales impuestas por la Corona, con el objetivo de modernizar la economía y aumentar la producción, como la disolución y el reparto de los resguardos indígenas, que había sido ya propuesta por el vocal de la Junta Suprema de Santafé de Bogotá, con el fin de que dichas tierras pudieran ser incorporadas a las actividades productivas y que estas fueran ejecutadas por la misma población. (Figueroa, 2013).

Bajo este contexto y al parecer sin la ejecución de las medidas de la Junta Suprema, el 05 de julio de 1820, Bolívar expide un decreto en el cual dispuso declarar propietarios legítimos de los resguardos a los naturales que los ocupan. Posteriormente el Congreso de Cúcuta, mediante Ley del 11 de octubre de 1821, dispuso que dentro de los 5 años siguientes se deberían realizar los repartos individuales de las tierras de los resguardos indígenas que las ocupaban (Figueroa, 2013).

Posterior a la disolución, la Nueva Granada, mediante Ley del 6 de marzo de 1821, ordenó que los resguardos debían ser divididos para fomentar la colonización, financiar la educación de los indígenas, el pago de las mensuras de los resguardos y el repartimiento entre los

*«Por la cual se cierra la fase administrativa para los asuntos de formalización privada y administración de derechos y se declara la formalización privada rural, en el marco del Procedimiento Único regulado por el Decreto Ley 902 del 2017 »*

miembros del resguardo.

Un mes después fue expedido el Decreto del 9 de abril de 1982, en el artículo 3, se impuso la obligación de nombrar peritos imparciales para medir y avaluar las tierras correspondientes al resguardo (Mayorga García, 2013), lo que conllevó a la conformación de los listados de los indígenas vinculados a cada una de las parroquias (artículo 1), señalando el número de integrantes de cada una de las familias (artículo 2) y a que la propiedad comunal fuera integrada a los predios de propiedad privada, aun cuando en varias ocasiones se impedía de manera temporal el ejercicio de las facultades de disposición de los derechos.

Esta medida buscó que los indígenas no se desprendieran fácilmente de las tierras asignadas, pero, sobre todo, a evitar que desposeídos se vieran en la necesidad de emigrar a otras zonas, arriesgando la disposición de mano de obra dentro de la respectiva zona.

Bajo este contexto es adelantado el repartimiento del resguardo de Chivatá que se consignó dentro la Escritura Pública No 2898 de fecha 14 de octubre de 1946, que se analiza dentro de este documento.

#### **2.1.2. Repartimiento del resguardo de la Parroquia de Chivata**

Del análisis de la Escritura Pública No. 2898 del 14 de octubre de 1946, se evidenció que el mencionado reparto tuvo sustento en La Ley del 6 de marzo de 1832 y el Decreto del 9 de abril de 1832. Que las mencionadas diligencias iniciaron con el reconocimiento de los linderos, para luego continuar con la medición de las circunferencias del resguardo y finalizar con la separación del pedazo de terreno que resulta en favor de la comunidad de indígenas, con lo que se concluyeron las diligencias de repartición del resguardo de indígenas de la parroquia de Chivatá.

##### **2.1.2.1. Diligencias de medición y avalúo**

Al inicio de las diligencias realizadas para el repartimiento del resguardo se presentaron inconvenientes, en razón a la existencia de ciertas irregularidades, entre las cuales señalan: 1.) que no se agregaron las listas de los indígenas de acuerdo con lo estipulado en el artículo 1 del decreto de la materia, 2.) No se cumplió con las disposiciones del artículo 3 de la Ley del 6 de marzo de 1832 y 3.) El nombramiento de peritos para adelantar diligencias se realizó sin la aquiescencia de los cabildos de los indígenas.

Posterior a ello, se realizó una nueva comisión para que, con arreglo a la ley y el decreto, procedieran inmediatamente a practicar en aquel resguardo las diligencias de medición y avalúo. Iniciaron con el reconocimiento de los linderos, para luego continuar con la medición de las circunferencias del resguardo y finalizaron con la separación del pedazo de terreno que resultó en favor de la comunidad de indígenas. Una vez aprobadas las diligencias, se solicitó que, en cumplimiento del último decreto de la materia, tuvieran puntual efecto; de igual manera fueron remitidas al Juez Jefe de las Medidas de Chivatá, con la finalidad de poner en posesión del terreno que correspondía a cada jefe de familia, a quien además debía entregársele un certificado en el que se copiaran las diligencias que se hubiesen practicado en la adjudicación y que se expresará el área, los linderos y todo lo demás que fuera sustancial para constituir un verdadero título de propiedad.

##### **2.1.2.2. Inscripción del título**

La debida inscripción del título se verificó de acuerdo con el asiento registral de la Oficina de Instrumentos Públicos de Tunja, que señala la existencia del mismo en el Libro Primero Par de Tunja del año 1946, bajo la partida 2898, el día 14 de octubre de 1946 *“el repartimiento del resguardo de indígenas de la parroquia de chivata Colombia estado de la nueva granada*

*«Por la cual se cierra la fase administrativa para los asuntos de formalización privada y administración de derechos y se declara la formalización privada rural, en el marco del Procedimiento Único regulado por el Decreto Ley 902 del 2017 »*

*Tunja febrero 15 de 1833”*

### **2.1.2.3. Repartimiento de tierras del resguardo**

La primera subdivisión mencionada en el documento es la demarcación de 18 fanegadas, que se dividieron en 36 manzanas para la población de la parroquia y una parte separada para la escuela en el sector de Siatoca. La parte sobrante se clasificó en dos clases de terreno caracterizados por la cercanía a los centros poblados, tipo de terreno, contenido de cuerpos hídricos y altura.

Se inició el repartimiento de tierra entregando como parte de pago en seis porciones de tierra delimitadas con redacción de linderos para; los participantes del avalúo, agrimensores del repartimiento del resguardo de Chivatá y pagos adicionales. Las partes fueron destinadas así; dos partes para los dos agrimensores del resguardo Francisco Vélez y Román Castro; una parte para el juez que dictaminó el reparto Silvestre Nempeque; otra parte para el cabildo indígena; otra parte englobada para los evaluadores Juan Domingo, Santos Álvarez, Basilio León y Antonio Prieto y por último una parte para la comunidad indígena en pago a favor del repartimiento y las casas de los indígenas ubicados en la escuela.

Luego se remató el pedazo de terreno equivalente a la doceava parte del resguardo mencionado equivalente a cincuenta y una fanegada en compensación a la solicitud respecto al pago de las casas de varios indígenas comprendidos dentro de los terrenos de la escuela y otros costos para llevar a cabo la diligencia del repartimiento. El señor Ignacio Pinzón es quien gana el remate pregonado por el señor Gabriel González.

Finalmente, se determinó el restante de terreno en tres mil ciento veinte fanegadas en la primera clase y dos mil ochenta fanegadas en la segunda clase 2. Esta tierra clasificada y avaluada fue dividida en cada familia inscrita en el listado enumerado dentro del documento de registro donde se inscribe un total de 718 numeraciones con el nombre de la familia indígena y otros que queda a cargo de la parte que fue otorgada.

### **2.1.2.4. Reconstrucción del lindero del resguardo indígena.**

Una vez realizado el procedimiento de reconstrucción de los linderos generales del resguardo indígena de Chivatá se pudo identificar una correspondencia casi exacta respecto de la formación del Municipio de Chivatá hoy vigente. Esto se debe a que, en la historia, cada uno de estos resguardos del sector del altiplano Boyacense constituyó lo que hoy en día corresponde a los Municipios conocidos como Oicatá, Chivatá, Motavita entre otros. Así, luego de la obtención de los puntos, se construyó el perímetro del título histórico destacando que, se divide en dos partes, una que cubre todo el municipio de Chivatá con un área de 4953 ha y 9105 m<sup>2</sup>, y, la otra es una porción del resguardo que cubre una pequeña parte del Municipio de Oicatá en la Vereda Forantivá con un área de 324 ha y 0268 m<sup>2</sup>.

### **2.1.3. Reconstrucción histórica como evidencia de propiedad privada en el Municipio de Chivatá, Boyacá**

Las evidencias obtenidas por medio de la investigación histórica de reconstrucción de la propiedad en el municipio de Chivatá, han permitido establecer la condición jurídica del predio materia de este acto administrativo como de propiedad privada. En efecto, los hallazgos documentales dan cuenta que el predio de mayor extensión, objeto de formalización, como otros bienes inmuebles ubicados en el municipio de Chivatá, salieron de dominio del resguardo de la Parroquia de Chivata, a través de la división de este, que tuvo sustento jurídico en la Ley del 6 de marzo de 1832 y en el Decreto del 9 de abril de 1932. El reparto individual de las tierras del resguardo, significó el desprendimiento de las tierras del dominio del resguardo indígena, confiriéndole desde entonces a las mismas un carácter

*“Por la cual se cierra la fase administrativa para los asuntos de formalización privada y administración de derechos y se declara la formalización privada rural, en el marco del Procedimiento Único regulado por el Decreto Ley 902 del 2017”*

privado, lo que sin lugar a duda viabiliza los procesos de formalización de los predios rurales ubicados en este globo de terreno.

Teniendo en cuenta lo anterior, es posible afirmar que el predio materia de estudio tiene la condición jurídica de bien inmueble rural de **PROPIEDAD PRIVADA**, en virtud de los actos repartimiento del resguardo de indígenas de la parroquia de Chivata. Este tratamiento que se ha mantenido hasta la fecha, ha dado certeza de que no existe ningún indicio de pérdida de legitimidad o ilegalidad del repartimiento del resguardo, como tampoco elementos de convicción que hagan suponer un relevo hacia propiedad en cabeza del resguardo indígena de la Parroquia de Chivata

### 3. ANTECEDENTES

Que mediante **Auto No. 20223100050969 del seis (06) de julio de 2022**, se dispuso dar inicio al trámite administrativo para los asuntos de formalización privada y administración de derechos estipulado en el Decreto Ley 902 del 2017 y la Resolución 740 de 2017, presentado por la señora **MARIA ANTONIA SÁNCHEZ DE RIVERA** identificada con cédula de ciudadanía No. **23.273.501 de Tunja** al cual se le asignó el número **FISO No. 0195152 y Expediente 202122010699807020E**, en relación con el predio rural denominado “**EL PINO**”, que tiene un área para formalizar de **0 ha + 2640 m<sup>2</sup>**, ubicado en la vereda Ricaya, Municipio de Chivatá, Departamento de Boyacá. el cual hace parte de un predio en mayor extensión denominado registralmente como **SIN DIRECCION. EL MORTIÑO**, identificado con el Folio de Matrícula Inmobiliaria No. **070-2851** de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos Tunja, Boyacá y número predial **151870000000000040127000000000**.

Que la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Tunja, Boyacá inscribió en la anotación no. 12 del 22 de julio de 2022 del folio de matrícula inmobiliaria no. 070-2851, el **Auto No. 20223100050969 del seis (06) de julio de 2022**.

Que el **Auto No. 20223100050969 del seis (06) de julio de 2022**, fue publicitado en la emisora “Colombia Estéreo 90.1 FM”, conforme el artículo 70 del Decreto Ley 902 de 2017, como consta en el expediente respectivo.

Que el **Auto No. 20223100050969 del seis (06) de julio de 2022**, fue comunicado al Ministerio Público como obra en el expediente respectivo.

Que el **Auto No. 20223100050969 del seis (06) de julio de 2022**, fue notificado mediante estado a la solicitante, fijado por el término de un día, según lo dispuesto en el artículo 70 del Decreto Ley 902 de 2017 como consta en el expediente respectivo.

Que el **Auto No. 20223100050969 del seis (06) de julio de 2022**, fue comunicado en la página Web y en un lugar de acceso al público de la Agencia Nacional de Tierras, a los terceros que pudieran verse afectados dentro de la presente actuación administrativa, en virtud del artículo 70 del Decreto Ley 902 de 2017.

Que de igual manera, la mencionada comunicación a terceros que pudieran verse afectados con la actuación administrativa, adelantada mediante **Auto No. 20223100050969 del seis (06) de julio de 2022**, fue colgada en la Página Web de la Alcaldía Municipal de Chivatá, Boyacá durante el mismo lapso de tiempo en que permaneció fijada la comunicación invocada en el párrafo que precede.

Que mediante oficio **DTMV2-202206256** del 9 de junio de 2022, la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras, Meta, señala que sobre el folio **070-2851** no se encuentra dentro de las zonas focalizadas en el marco del trámite establecido en los Decretos Ley 4633, 4634, y 4635 del 2011.

*“Por la cual se cierra la fase administrativa para los asuntos de formalización privada y administración de derechos y se declara la formalización privada rural, en el marco del Procedimiento Único regulado por el Decreto Ley 902 del 2017 ”*

Que la Resolución 740 de 2017 “, estableció en su artículo 92, modificado por la Resolución 7622 de 2019, respecto del procedimiento de formalización privada en zonas no focalizadas, que si hasta antes de la expedición del acto administrativo que ponga fin al procedimiento, de conformidad con el artículo 80 de la Resolución 740 de 2017, “(...) *no comparece ningún tercero indeterminado a hacer valer sus derechos, no comparece el propietario registrado y se establece con total certeza que la formalización no presenta oposición ni posible vulneración de derechos, se podrá prescindir el periodo probatorio, siempre que las pruebas recaudadas sean suficientes para poder proceder a emitir la correspondiente decisión de cierre de la fase administrativa del procedimiento único, sin necesidad de que previamente sea emitido el informe técnico jurídico definitivo.*”

#### 4. ANÁLISIS DEL CASO.

4.1 El artículo 48 de la Ley 160 de 1994 indica que la propiedad privada se acredita de dos formas, la primera de ellas con un título originario expedido por el Estado que no haya perdido su eficacia legal, y la segunda, mediante títulos, debidamente inscritos, otorgados con anterioridad a la vigencia de la Ley 160 de 1994, en que consten tradiciones de dominio por un lapso no menor del término que señalan las leyes para la prescripción extraordinaria.

Para el caso particular se evidencia que el predio objeto del procedimiento se encuentra vinculado al Folio de Matrícula Inmobiliaria No. 070-2851 de tipo rural, de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de la Ciudad de Tunja, Departamento de Boyacá, con fecha de apertura del 04 de noviembre de 1977. El estado del folio es activo, registra inscritas 12 anotaciones, no tiene folio matriz, no presenta folios derivados y cuenta con anotaciones en su acápite de complementación.

Que, conforme al estudio de títulos realizado al folio de matrícula inmobiliaria del predio en mayor extensión denominado SIN DIRECCION . EL MORTIÑO, es posible afirmar que el inmueble proviene del acto jurídico de ADJUDICACIÓN EN SUCESIÓN, contenido en la sentencia de sucesión del 14 de abril de 1977, proferida por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Tunja, cuyo modo se encuentra perfeccionado, según da cuenta el registro efectuado el 22 de junio de 1977 en la anotación No. 1 del folio en mención, del cual NO es posible evidenciar la existencia de títulos debidamente inscritos otorgados con anterioridad a la vigencia de la Ley 160 de 1994, en los que constan tradiciones de dominio por un lapso no menor a 20 años.

Sin embargo, por tratarse de inmuebles ubicados dentro del perímetro de reconstrucción histórica del resguardo de la parroquia de Chivatá, cuyas tierras fueron repartidas de manera individual, es posible aplicar la regla del numeral segundo del Artículo 48 de la Ley 160 de 1994, en razón de que las evidencias obtenidas por medio de la investigación histórica de reconstrucción de la propiedad en el municipio de Chivatá, han permitido establecer la condición jurídica del predio denominado SIN DIRECCION . EL MORTIÑO como PROPIEDAD PRIVADA. Ciertamente, los hallazgos documentales dan cuenta que el predio materia de formalización, como otros bienes inmuebles ubicados en el municipio de Chivatá, salieron de dominio del resguardo de la Parroquia de Chivata, a través de la división de este, que tuvo sustento jurídico en la Ley del 6 de marzo de 1832 y en el Decreto del 9 de abril de 1932. El reparto individual de las tierras del resguardo, significó el desprendimiento de las tierras del dominio del resguardo indígena, confiriéndole desde entonces a las mismas un carácter privado, lo que sin lugar a duda viabiliza los procesos de formalización de los predios rurales ubicados en este globo de terreno.

Por lo anteriormente expuesto, es posible afirmar que el predio materia de estudio tiene la

*«Por la cual se cierra la fase administrativa para los asuntos de formalización privada y administración de derechos y se declara la formalización privada rural, en el marco del Procedimiento Único regulado por el Decreto Ley 902 del 2017 »*

condición jurídica de bien inmueble rural de PROPIEDAD PRIVADA, en virtud de los actos repartimiento del resguardo de indígenas de la parroquia de Chivata. Este tratamiento que se ha mantenido hasta la fecha, ha dado certeza de que no existe ningún indicio de pérdida de legitimidad o ilegalidad del repartimiento del resguardo, como tampoco elementos de convicción que hagan suponer un relevo hacía propiedad en cabeza del resguardo indígena de la Parroquia de Chivata. Conforme con lo anterior, se encuentra que la solicitud ES VIABLE, de conformidad con la información registral que reposa en el Libro Primero Par de Tunja del año 1946, bajo la partida 2898, el día 14 de octubre de 1946 “el repartimiento del resguardo de indígenas de la parroquia de chivata Colombia estado de la nueva granada Tunja febrero 15 de 1833”.

4.2. Que de acuerdo con la información que reposa en el Libro Primero Par de Tunja del año 1946, bajo la partida 2898, el día 14 de octubre de 1946 “el repartimiento del resguardo de indígenas de la parroquia de chivata Colombia estado de la nueva granada Tunja febrero 15 de 1833” los titulares del derecho real de dominio son los siguientes: La población de la parroquia, la escuela en el sector de Siatoca, agrimensores del resguardo Francisco Vélez y Román Castro; juez que dictaminó el reparto Silvestre Nempeque; cabildo indígena; los evaluadores Juan Domingo, Santos Álvarez, Basilio León y Antonio Prieto, comunidad indígena y las casas de los indígenas ubicadas en la escuela, el señor Ignacio Pinzón, como adjudicatario de la doceava parte del resguardo y cada familia inscrita en el listado enumerado dentro del documento de registro donde se inscribe un total de 718 numeraciones con el nombre de la familia indígena.

4.3. No se identificaron medidas cautelares y/o gravámenes.

4.4. De acuerdo con la información contenida en el expediente, se constata que la señora MARIA ANTONIA SANCHEZ DE RIVERA, ha ejercido posesión material QUIETA, PACÍFICA, PÚBLICA e ININTERRUMPIDA por periodo de tiempo más de diez (10) años, sobre el predio rural denominado "EL PINO", en el cual realiza EXPLOTACIÓN ECONÓMICA sin reconocer dominio ni otros derechos a personas o entidades diferentes; con ocasión de la donación verbal efectuada hace 40 años, por el señor VICTOR JULIO RIVERA LOPEZ, quien a su vez, ingresó al predio en virtud de la compraventa efectuada a los señores CELESTINO CRUZ MONTERO, ADELAIDA CRUZ MONTERO y MARIA GRICELDA CRUZ MONTERO, protocolizada mediante Escritura Pública No. 1352 del 03 de agosto de 1977 de la Notaría Primera de Tunja, registrada en la anotación No. 02 del 04 de noviembre de 1977 del FMI 070-2851.

Que lo anterior se acredita con los documentos de Declaraciones recibidas el 08 de junio de 2022, por el Programa de Formalización de la Propiedad Rural, suscritas por las señoras NELCY QUIROZ GUITIERREZ, quien se identificó con cédula de ciudadanía No. 23.280.248 de Chivatá y SANDRA MILENA MOTIVAR GUERRERO, quien se identificó con cédula de ciudadanía No. 23.280.474 de Chivatá, en las cuales se constata la posesión ejercida por la solicitante, de forma exclusiva, pacífica, pública e ininterrumpida sobre el predio objeto de formalización, por un periodo que oscila entre 40 a 42 años aproximadamente; el cual es destinado para actividades de tipo agrícola, consistentes en el cultivo de maíz, arveja y papa. En los testimonios se reconoce que el predio fue adquirido con ocasión de la entrega mediante donación verbal realizada por el señor VICTOR JULIO RIVERA LOPEZ, quien a su vez, tuvo en posesión el predio por tres años.

Que obra el Acta de colindancia y croquis, elaborada por el Programa de Formalización de la Propiedad Rural, de fecha del 30 de julio de 2021, la cual reposa en el SIT – Formalización, suscrita por los señores FABIAN HERNANDO HERRERA RIVERA, quien se identificó con cédula de ciudadanía No. 1.051.568.367, MIGUEL ANTONIO RIVERA SANCHEZ, quien se

*«Por la cual se cierra la fase administrativa para los asuntos de formalización privada y administración de derechos y se declara la formalización privada rural, en el marco del Procedimiento Único regulado por el Decreto Ley 902 del 2017 »*

identificó con cédula de ciudadanía No. 40.421.561 y MARIA ANTONIA SANCHEZ, quien se identificó con cédula de ciudadanía No. 23.273.501; quienes asistieron y aprobaron el procedimiento realizado por el profesional y a la vez manifestaron conformidad con los linderos señalados durante el levantamiento topográfico del predio rural denominado "EL PINO", consignados en el referido documento.

4.5. Que lo anterior permite concluir que, en visita realizada en el predio solicitado en formalización denominado **EL PINO**, se REALIZÓ LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO sobre la porción de terreno pedido en formalización; así mismo se recaudó acta de colindancia en la que intervienen los colindantes presentes del inmueble objeto de formalización y finalmente se tomaron testimonios con el objeto de determinar circunstancias de modo y tiempo respecto a los actos de posesión esgrimidos por la solicitante **MARIA ANTONIA SÁNCHEZ DE RIVERA**, adicionalmente se recolectaron documentos que acreditan que la posesión ha sido pública, pacífica e interrumpida por el término exigido en el artículo 2529 y ss del Código Civil. Todo lo anterior, evaluado en conjunto y teniendo en cuenta que dentro del trámite de formalización no existe tarifa legal, permite afirmar que los medios probatorios recaudados dentro de la presente actuación administrativa, brindan certeza sobre la naturaleza jurídica del inmueble y los supuestos de hecho y de derecho que sustentan la titulación.

Que de acuerdo con lo anteriormente señalado y las pruebas obrantes en el proceso, se concluye que la señora **MARIA ANTONIA SÁNCHEZ DE RIVERA** ha ejercido posesión sobre el predio denominado "EL PINO" por un periodo superior de diez (10) años, con un área solicitada de **0 ha + 2640 m<sup>2</sup>** ello, conforme a los medios probatorios conducentes, pertinentes y útiles valorados a la luz de la sana crítica, los cuales obran en el repositorio documental del expediente.

4.6. Que el predio denominado "EL PINO", se identifica con los linderos técnicos consignados en el Documento Preliminar de Análisis Predial DPAP, los cuales se transcriben a continuación:

#### LINDEROS TÉCNICOS

**PUNTO DE PARTIDA:** Se tomó como punto de partida el número 01 con coordenadas planas X= 1086389,77 m y Y= 1105223,99 m, ubicado en la parte noroccidental del predio, donde concurren las colindancias de FABIAN HERNANDO HERRERA RIVERA predio con número predial 151870000000000040127000000000, MARIA ANTONIA SANCHEZ DE RIVERA predio con número predial 151870000000000040600000000000, y el predio objeto.

**NORTE:** Del punto de partida 01 en dirección sureste, en línea recta y en una distancia de 61,8 m, hasta encontrar el punto 02 con coordenadas planas X= 1086440,69 m y Y= 1105188,92 m, colindando con MARIA ANTONIA SANCHEZ DE RIVERA predio con número predial 151870000000000040600000000000.

**ESTE:** Del punto 02 se continúa en dirección suroeste, en línea recta y en una distancia de 61,2 m, hasta encontrar el punto 03 con coordenadas planas X= 1086387,55 m y Y= 1105158,7 m, colindando con MIGUEL ANTONIO RIVERA SANCHEZ predio con número predial 151870000000000040132000000000.

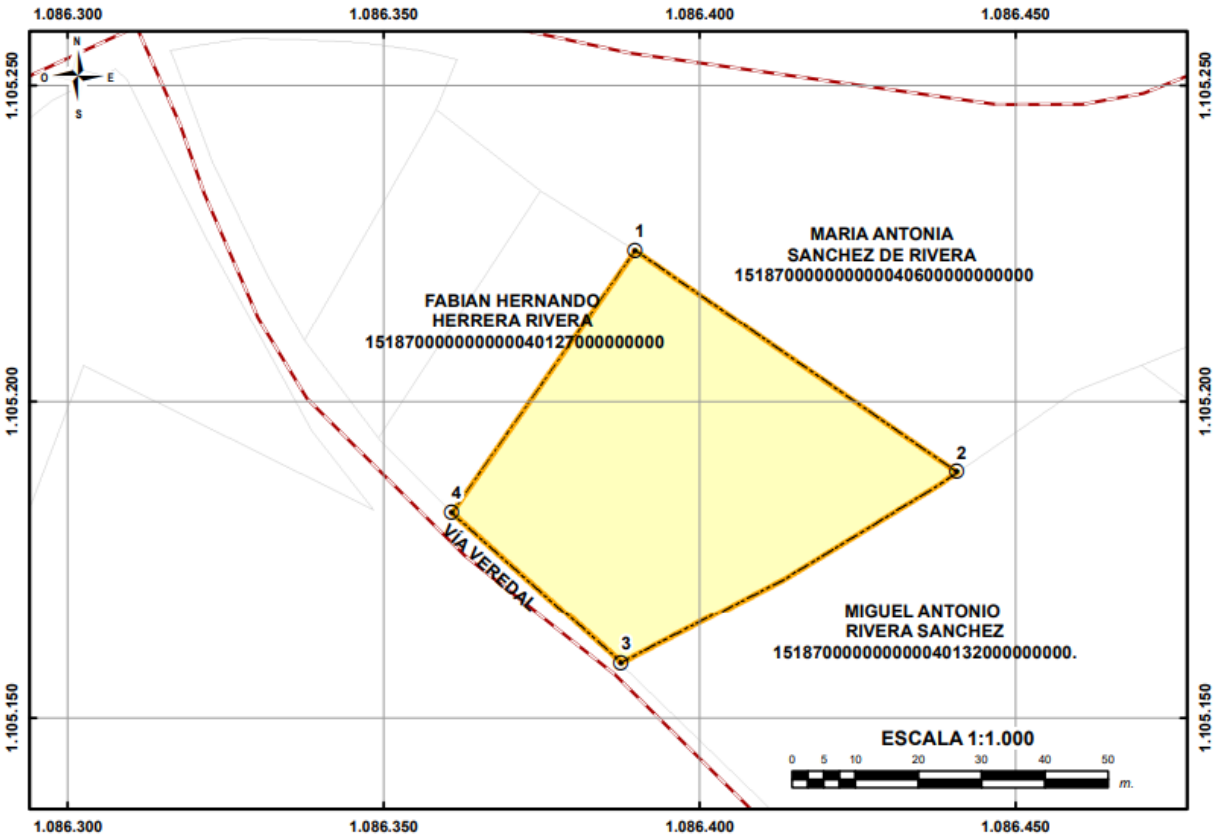
**SUR:** Del punto 03 se continúa en dirección noroeste, en línea recta y en una distancia de 35,8 m, hasta encontrar el punto 04 con coordenadas planas X= 1086360,75 m y Y= 1105182,51 m, colindando con VÍA VEREDAL.

**OESTE:** Del punto 04 se continúa en dirección noreste, en línea recta y en una distancia de 50,6 m hasta encontrar el punto 01 con coordenadas conocidas, colindando con FABIAN

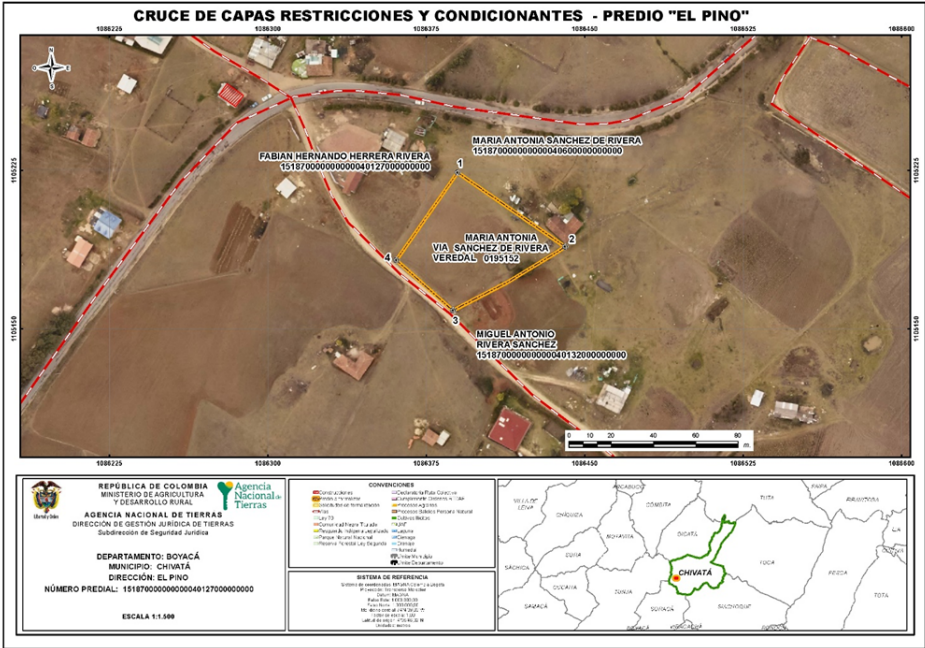


“Por la cual se cierra la fase administrativa para los asuntos de formalización privada y administración de derechos y se declara la formalización privada rural, en el marco del Procedimiento Único regulado por el Decreto Ley 902 del 2017 ”

HERNANDO HERRERA RIVERA predio con número predial 151870000000000040127000000000 y encierra.



Adicionalmente, se realiza el cruce espacial del polígono objeto de estudio con las capas de restricciones y condicionantes, no se evidencia sobreposiciones totales o parciales que puedan afectar el proceso de formalización como se evidencia a continuación.



*“Por la cual se cierra la fase administrativa para los asuntos de formalización privada y administración de derechos y se declara la formalización privada rural, en el marco del Procedimiento Único regulado por el Decreto Ley 902 del 2017”*

Según la información del Documento Preliminar de Análisis Predial- DPAP, se pudo determinar que el predio en solicitud se encuentra en una **ZONA DE SUSCEPTIBILIDAD ALTA** por procesos erosivos y fenómenos de remoción en masa, según fuente de datos sobre los cuales se sustenta el Plan Básico de Ordenamiento Territorial PBOT, Acuerdo No. 11 de 2001 (PLANO No. 6 – AMENAZAS DE PBOT). Por lo tanto, se solicitó a la Oficina de Planeación Municipal de Chivatá, a través del radicado No. **20223100594831** de fecha del **18 de mayo de 2022**, el certificado de uso del suelo para identificar si el riesgo es de carácter mitigable o no mitigable, sin que a la fecha se haya obtenido respuesta por parte de la Alcaldía. Así mismo, es importante precisar que si bien la Secretaría de Planeación Municipal, del Municipio de Chivata, no despejó si el riesgo que afecta el predio de mayor extensión, es mitigable o no; aun cuando ello es un deber que le fue revestido a ésta autoridad por virtud del artículo 14 de la Ley 1523 de 2012, que preceptúa a las entidades territoriales la consigna de integrar en la planificación del desarrollo local, acciones estratégicas y prioritarias en materia de gestión del riesgo de desastres, especialmente, a través de los planes de ordenamiento territorial y demás instrumentos de gestión pública, no es legítimo trasladar la ausencia del pronunciamiento a los solicitantes, dejando en incertidumbre su derecho a la formalización frente a la tierra, con la que tienen un arraigo agrario, familiar y social, ampliamente tejido por los años; y por el contrario, resulta imperioso que se impulse con celeridad el procedimiento, toda vez que de esta forma, los solicitantes, podrán tener certeza jurídica de su titularidad del predio y solicitar a las autoridades competentes la declaratoria de los derechos a que haya lugar, dentro del marco Ley 1523 de 2012 y decretos reglamentarios en materia de Gestión del Riesgo.

Conforme con lo anterior, esta Subdirección de Seguridad Jurídica valora la situación a la luz de los insumos técnicos y probatorios obrantes en el expediente, de los que se infiere, que el predio no se encuentra ubicado en una zona declarada como de riesgo no mitigable por lo que resulta aplicable el proceso de formalización de la propiedad.

Cabe destacar que existe un espacio geográfico donde se localiza una capilla perteneciente al municipio (1159 m<sup>2</sup>) a cuatro de estos predios y que constituirá parte del área remanente del predio matriz, una vez se otorguen los títulos asociados a dichas solicitudes, así las cosas, el área total para el folio 070-2851 sumado el anterior acceso es de 1 ha + 2634 m<sup>2</sup>. Ya que el folio 070-2851 posee una cabida de 1 ha 2750 m<sup>2</sup> y la sumatoria de las áreas correspondientes a los levantamientos equivale a 1 ha + 2634 m<sup>2</sup>, existe área suficiente para proceder con el trámite de formalización de las solicitudes que pertenecen a dicho folio de matrícula.

Que el acervo probatorio recaudado dentro de la solicitud con FISO No. 0195152 y Expediente 202122010699807020E, se compone de los documentos aportados por el solicitante, las diligencias de tipo documental y/o testimonial recaudadas, las cuales se relacionaron en el **Auto No 20223100050969 del seis (06) de julio de 2022**; cuyo fin fue dilucidar la calidad de propiedad privada del bien objeto de estudio y la relación jurídica de posesión ejercida sobre el mismo, por parte de los solicitantes.

Que una vez surtidas las etapas y actuaciones correspondientes del procedimiento único de ordenamiento social de la propiedad, donde se incorporaron y valoraron elementos probatorios conducentes, pertinentes y útiles, que acreditaron que el predio solicitado en formalización, es de naturaleza privada y que la solicitante, demostró el ejercicio de la posesión de manera pública, pacífica e ininterrumpida durante el lapso necesario para adquirir por prescripción extraordinaria de dominio, esto es, diez (10) años, ejerciendo actos

*“Por la cual se cierra la fase administrativa para los asuntos de formalización privada y administración de derechos y se declara la formalización privada rural, en el marco del Procedimiento Único regulado por el Decreto Ley 902 del 2017 ”*

con ánimo de señora y dueña, sin haberse presentado oposición alguna dentro de las oportunidades establecidas, la Subdirección de Seguridad Jurídica procederá al cierre de la fase administrativa para los asuntos de formalización privada.

En mérito de lo expuesto, la Subdirección de Seguridad Jurídica de la Agencia Nacional de Tierras emitirá la decisión de cierre del Procedimiento Único establecido en el Decreto 902 del 2017 profiriendo la decisión definitiva, en cuanto a la formalización de la propiedad privada y administración de derechos, según lo establecido en el artículo 74 del Decreto 902 del 2017.

II. RESUELVE

**PRIMERO: CERRAR** la actuación administrativa que se adelanta con ocasión del trámite administrativo de formalización privada y administración de derechos, regulado por el Decreto Ley 902 de 2017, en favor de la señora **MARIA ANTONIA SÁNCHEZ DE RIVERA** identificada con cédula de ciudadanía No. **23.273.501 de Tunja**, a quien su solicitud le fue asignado el FISO No. 0195152 y Expediente 202122010699807020E, con relación a su derecho sobre el predio rural denominado **“EL PINO”**, que hace parte de un predio en mayor extensión identificado con folio de matrícula número **070-2851**, con cédula catastral **151870000000000040127000000000**, ubicado en la Vereda Ricaya, del Municipio de Chivatá , Departamento de Boyacá.

**SEGUNDO: DECLARAR** la titulación de la posesión y saneamiento de la falsa tradición por acaecimiento de la prescripción adquisitiva extraordinaria de dominio dentro del trámite administrativo de formalización privada y administración de derechos regulado por el Decreto Ley 902 del 2017, a favor de la señora **MARIA ANTONIA SÁNCHEZ DE RIVERA** con cédula de ciudadanía No. **23.273.501 de Tunja**, sobre el predio rural denominado **“EL PINO”**, que hace parte de un predio en mayor extensión identificado con folio de matrícula número **070-2851**, con cédula catastral **151870000000000040127000000000**, ubicado en la Vereda Ricaya, del Municipio de Chivatá, Departamento de Boyacá

Nombre del predio	RUPTA	Matricula Inmobiliaria	Cédula Catastral	Área del predio a formalizar	Área total del predio(Has)
EL PINO	No registra en el folio	070-2851	151870000000000040127000000000	0 ha + 2640m²	Registral: 1 Ha + 2750m² Catastral: 1 Ha + 2253 m²

**TERCERO: NOTIFICAR** el presente acto administrativo a los beneficiarios en los términos de la Ley 1437 del 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo - CPACA.

**CUARTO: CANCELAR** la inscripción de la apertura del Procedimiento Único de Ordenamiento Social de la Propiedad, ordenada mediante **Auto de No. 20223100050969 del seis (06) de julio de 2022** y registrada en la anotación no. 12 del folio de matrícula inmobiliaria número **070-2851** de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos del Círculo de Tunja (Boyacá).

**QUINTO: ORDENAR** al Registrador de Instrumentos Públicos del Círculo de Tunja (Boyacá),

*«Por la cual se cierra la fase administrativa para los asuntos de formalización privada y administración de derechos y se declara la formalización privada rural, en el marco del Procedimiento Único regulado por el Decreto Ley 902 del 2017 »*

que inscriba con el **código registral No. 01012 (Declaración de la Titulación de la Posesión y Saneamiento de la Falsa Tradición – Decreto Ley 902 de 2017)** que versa sobre el cierre de procedimiento único de ordenamiento social de la propiedad rural, desarrollado por la Agencia Nacional de Tierras – ANT, NIT 900948953-8, en el folio de matrícula inmobiliaria No. **070-2851**, que identifica el inmueble rural denominado **“SIN DIRECCION .EL MORTIÑO”** , ubicado en la Vereda Ricaya, del Municipio de Chivatá, Departamento de Boyacá. **Una vez cumplida la medida, informar a la Subdirección de Seguridad Jurídica de la ANT dicha inscripción en el término máximo de diez (10) días hábiles.**

**SEXTO: ORDENAR** la asignación de un folio de matrícula inmobiliaria para el predio **“EL PINO”**, objeto de la formalización de la propiedad privada rural, con un área de **0 ha + 2640 m2**, ubicado en la vereda **RICAYA** del municipio de **CHIVATÁ**, departamento de **BOYACÁ** donde se inscriba como propietaria a la señora **MARIA ANTONIA SÁNCHEZ DE RIVERA** identificada con cédula de ciudadanía No. **23.273.501 de Tunja**, del predio que cuenta con los siguientes linderos:

**PUNTO DE PARTIDA:** Se tomó como punto de partida el número 01 con coordenadas planas X= 1086389,77 m y Y= 1105223,99 m, ubicado en la parte noroccidental del predio, donde concurren las colindancias de **FABIAN HERNANDO HERRERA RIVERA** predio con número predial 151870000000000040127000000000, **MARIA ANTONIA SANCHEZ DE RIVERA** predio con número predial 151870000000000040600000000000, y el predio objeto.

**NORTE:** Del punto de partida 01 en dirección sureste, en línea recta y en una distancia de 61,8 m, hasta encontrar el punto 02 con coordenadas planas X= 1086440,69 m y Y= 1105188,92 m, colindando con **MARIA ANTONIA SANCHEZ DE RIVERA** predio con número predial 151870000000000040600000000000.

**ESTE:** Del punto 02 se continúa en dirección suroeste, en línea recta y en una distancia de 61,2 m, hasta encontrar el punto 03 con coordenadas planas X= 1086387,55 m y Y= 1105158,7 m, colindando con **MIGUEL ANTONIO RIVERA SANCHEZ** predio con número predial 151870000000000040132000000000.

**SUR:** Del punto 03 se continúa en dirección noroeste, en línea recta y en una distancia de 35,8 m, hasta encontrar el punto 04 con coordenadas planas X= 1086360,75 m y Y= 1105182,51 m, colindando con **VÍA VEREDAL**.

**OESTE:** Del punto 04 se continúa en dirección noreste, en línea recta y en una distancia de 50,6 m hasta encontrar el punto 01 con coordenadas conocidas, colindando con **FABIAN HERNANDO HERRERA RIVERA** predio con número predial 151870000000000040127000000000 y encierra.

**Parágrafo:** De conformidad con lo dispuesto con el parágrafo 4 del artículo 8 del Decreto Ley 902 de 2017, por tratarse el presente caso de un predio privado, que no ha sido objeto de programas de acceso a tierras, no estará sometido a la prohibición de transferir el derecho de dominio o ceder el uso del bien, sin previa autorización expedida por la Agencia Nacional de Tierras.

**OCTAVO: REMITASE** la presente decisión una vez registrada al Instituto Geográfico Agustín Codazzi- IGAC, para la respectiva conservación catastral.

**NOVENO:** Contra el presente acto administrativo procede el recurso de reposición ante la Subdirección de Seguridad Jurídica y en subsidio apelación ante la Dirección de Gestión Jurídica de Tierras de la ANT, que pueden ser promovidos dentro de los diez (10) días hábiles, contados a partir del día siguiente de la notificación del presente acto administrativo, de conformidad con lo previsto en el artículo 76 de la Ley 1437 de 2011, en concordancia con



*«Por la cual se cierra la fase administrativa para los asuntos de formalización privada y administración de derechos y se declara la formalización privada rural, en el marco del Procedimiento Único regulado por el Decreto Ley 902 del 2017 »*

lo dispuesto en el artículo 19, numeral 7° del Decreto Ley 2363 de 2015.

**Notifíquese, Comuníquese y Cúmplase.**

Dada en Bogotá D.C., el 2022-08-23

**LEONARDO ANTONIO CASTAÑEDA CELIS**

Subdirector de Seguridad Jurídica

Agencia Nacional de Tierras - ANT

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

Proyectó: ANDRÉS FELIPE SALAMANCA MORENO  
Revisó: SAMIRA ASTRID VELEZ GARCÍA